

Nuevos emprendimientos socioproductivos ante la crisis. Una mirada desde el agro

Pablo Barbeta*

Las reformas económicas aplicadas durante la década de 1990 (apertura económica, privatizaciones, convertibilidad) significaron el paso final para la desarticulación de un régimen de acumulación que, en lo económico, se sustentaba en el modelo de “industrialización por sustitución de importaciones” (ISI) y que en términos relativos era “social y sectorialmente articulado” (Teubal; 1994). Los altos índices de pobreza e indigencia, las elevadas tasas de desocupación, la desaparición de pequeños y medianos productores agropecuarios, entre otros factores marcan el advenimiento de un régimen de acumulación social y sectorialmente desarticulado. Preguntarnos acerca de las iniciativas socio-productivas que desarrollan los actores en el ámbito rural para enfrentar esos procesos supone, por un lado, situarnos dentro de una postura epistemológica en la cual los actores sociales no son meros receptores pasivos de los cambios estructurales arriba presentados y que –si bien existen restricciones para la acción– pueden ser pensados como participantes activos que procesan la información y desarrollan estrategias tendientes a producir y transformar sus propias circunstancias (Giddens; 1997).

Por otro lado, preguntarnos si las estrategias desarrolladas actualmente tienen un carácter “novedoso”, supone remitirnos a experiencias pasadas con el objetivo de evaluar continuidades o rupturas con éstas. Por este motivo, el primer apartado se basará sobre aquellas estrategias desarrolladas por los actores durante el modelo de acumulación social y sectorialmente articulado para luego remitirnos a las desarrollos pos-ajuste.

Experiencias organizativas durante el ISI

Durante el ISI, el Estado fue el encargado de consolidar el desarrollo de la economía en su conjunto a través de medidas proteccionistas y políticas promocionales de la actividad productiva (Azpiazu D.; Basualdo, E.M., Khavisse M.;1989). Durante esta etapa, los procesos del mercado y del

Estado, lejos de ser antitéticos, eran complementarios, configurando lo que Teubal (1994) denomina un “modelo articulado”.

El Estado cumplía un importante papel en la expansión de la sociedad civil, que variaba desde la emergencia y fortalecimiento de las organizaciones de trabajadores hasta la influencia sobre ciertos dominios “privados” como la escuela, la familia y el lugar de trabajo. Si bien la participación popular era balanceada y compensada por la imposición del control estatal, la política era considerada como el canal de expresión de las demandas sociales.

En este escenario, rescatamos la importancia que suponía el proceso de institucionalización social desde la política, a través de canales cuasi-corporativos entrelazados con organizaciones públicas, asociaciones profesionales y sindicatos. En este sentido, el Estado cumplió un importante papel en la creación de dos importantes asociaciones gremiales a fines de la década de 1940: la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y la Federación de Obreros de Industria Azucarera Tucumana (FOTIA). Del mismo modo, con motivo del cierre de once ingenios azucareros entre los años 1964-1967, se crea, en este último año, la Cooperativa Trabajadores Unidos de Trabajo Agropecuario Ltda. (CTU) de Campo de Herrera en la provincia de Tucumán. Esta experiencia fue el producto de una acción colectiva intersectorial, cuyos principales actores fueron: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Secretaría de Estado de Promoción y Asistencia de la Comunidad –Gobierno Provincial–, Sacerdotes de Famaillá y los principales protagonistas: 118 trabajadores despedidos del ingenio azucarero Bella Vista, quienes con la indemnización y un crédito bancario adquirieron 2.000 ha y conforman la CTU.

En 1947 se había creado la Federación Argentina de Cooperativas Agrarias (FACA), movimiento cooperativo dependiente de la Federación Agraria Argentina (FAA), representante de pequeños y medianos productores agropecuarios. El objetivo principal de FACA suponía el desarrollo de acciones tendientes al mejoramiento de las condiciones para la comercialización de las cosechas y la integración agroindustrial por medio de la creación de agroindustrias, sobre todo de oleaginosas. FACA se convirtió así en una

herramienta para superar los problemas de escasez de recursos y de aislamiento y pudo lograr un mejor posicionamiento de los productores en el sistema agroindustrial.

En el contexto de estas experiencias organizativas, el mercado laboral se configuraba como el escenario activo en donde se posicionaban los grupos sociales, permitiéndoles el acceso a las políticas sociales estatales. Así en el caso de los sindicatos, la articulación del mercado laboral y de la política, a través de la satisfacción de demandas y la instrumentación de políticas sociales universalistas, implicó la referencia al Estado como garante, no sólo del modelo en su conjunto sino también como la expresión política a favor de la protección social.

Crisis y transformaciones. Las respuestas de los actores

El fin de este modelo de crecimiento sustitutivo en lo económico y distribucionista e integrador en lo social y político, sufre un quiebre a partir de mediados de la década del setenta, en primer lugar, con las medidas económicas impuestas en 1975 desde el Ministerio de Economía comandado por Celestino Rodrigo. Posteriormente, las bases para la redefinición del modelo de acumulación fueron implantadas por la dictadura militar a partir de 1976, imponiendo un nuevo comportamiento económico y social basado en la valorización financiera (Basualdo; 2001). Para ello fue necesario la implementación de un vasto proceso de reformas que introdujo profundos cambios económicos y sociales, impactando tanto sobre la estructura económica, el orden social como sobre el rol y las funciones del Estado. En el plano político, estas reformas pusieron en jaque la función integradora del Estado y de la política, perdiendo ésta última su centralidad como instancia unificadora de la vida social (Lechner, 1996).

Luego de la apertura democrática, el modelo de acumulación basado en la valorización financiera se sustentó en lo político en un modelo de dominación basado en el transformismo argentino (Basualdo; 2001). De aquí que haya sido posible en la década del 90 la instauración del Plan de Convertibilidad y la implementación de medidas de desregulación del sector

(disolución de mercados de concentración, de organismos de fiscalización y regulación de productos regionales, se eliminó el sistema de precios sostén, entre otras medidas), la apertura al exterior de la economía y las privatizaciones.

En el sector agropecuario estas medidas favorecieron a las grandes empresas de semillas y agroquímicos, profundizando la agroindustrialización, es decir, el incremento de los procesos de transformación, procesamiento, almacenamiento y comercialización de la producción agraria y la industrialización de la agricultura o, en otras palabras, el uso creciente de bienes de origen industrial, de insumos industriales y de servicios técnicos (Piñeiro; 1995). Además, "influyeron significativamente sobre las tendencias y la variabilidad de la actividad agropecuaria, sobre los precios de su producción y de sus insumos, el acceso al crédito, la rentabilidad general de la actividad agropecuaria y fundamentalmente, sobre las condiciones de vida de estos grupos [pequeños y medianos productores] mayoritarios del sector agropecuario" (Teubal y Rodríguez; 2000: 73).

Como consecuencia de la aplicación de medidas de apertura externa y desregulación durante la década del noventa se evidenciaron las siguientes transformaciones: a) una disminución en el número de explotaciones y un aumento en su tamaño medio, ya que los datos provisionales del último Censo Nacional Agropecuario de 2002 muestran una disminución del 24,5% en el total de explotaciones en relación con 1988. Además, si se tiene en cuenta que la superficie total de las explotaciones registra una variación de apenas 3,4% en el mismo período intercensal, puede observarse el proceso de concentración operado y el incremento del tamaño medio promedio de las explotaciones agropecuarias; b) la pérdida de rentabilidad en las unidades de menor escala y la constitución de nuevos umbrales de sostenibilidad (Teubal y Rodríguez, 2001); c) una intensificación de la capitalización en los procesos productivos. También merecen destacarse el incremento de los niveles de endeudamiento (Teubal y Rodríguez, op. cit.) y el aumento del empleo no agrario entre los productores y sus familias y d) una disminución del empleo rural. La respuesta del Estado para atemperar los costos del ajuste fue la

implementación de programas estatales –Cambio Rural y el Programa Social Agropecuario–, los cuales incluyen entre sus objetivos lograr una mayor escala a través de la promoción de formas asociativas.

Por otra parte, aumentaron los márgenes entre precios mayoristas y minoristas reflejando la creciente incidencia del supermercadismo en el país (Teubal y Rodríguez, 2002). La persistencia de precios más altos que aquellos que corresponderían en función de los aumentos de productividad registrados, contribuyó a que vastos sectores sociales redujeran sus consumos alimentarios, cuya expresión más visible son los altos índices de pobreza e indigencia. Situación, por cierto, que alcanzó a poblaciones tanto rurales como urbanas.

Durante la década de los noventa, las acciones colectivas de protesta llevadas a cabo por desocupados, trabajadores estatales, docentes y maestros, campesinos y medianos productores, indígenas, entre muchos otros, se fueron intensificando a medida que las consecuencias del modelo económico se pusieron de manifiesto. Reclamaban mayormente la acción del Estado como algo exterior al modelo económico vigente y *a posteriori*, cuando algo había “fallado”. Denunciaban, en términos generales, un orden social percibido como opresivo, excluyente e injusto. Si bien, estas protestas buscaban transformar e instituir nuevas configuraciones en el orden de lo social, el Estado, una y otra vez, tuvo la capacidad de regular el conflicto dentro del espacio institucional dado, y por lo tanto, de restituir el orden. Sin embargo, la intensificación de la desigualdad social, unida a un incremento de la pobreza y de la polarización social, y la degradación de la educación y de los servicios de salud, diluyeron, paulatinamente, la capacidad del Estado para articular los intereses y demandas de los distintos grupos sociales. Esta situación, sumada a una fuerte crisis de representación, se plasmaron en el acontecimiento del 19 y 20 de diciembre de 2001.

Ante el fracaso de las intervenciones de un Estado sobre exigido, muchas organizaciones que ganaron el espacio público reclamando por sus derechos no fueron meros espectadores pasivos ante las transformaciones económicas. Muchas de ellas articularon sus estrategias políticas con

emprendimientos productivos. En el ámbito rural, se destacan el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) y el Movimiento Agrario Misionero (MAM), entre otros. Estas organizaciones se sitúan por fuera del sistema institucional formal –el del Estado, los partidos políticos, sindicatos–, ya que buscan romper y superar ciertas reglas de juego de este sistema haciendo hincapié en una nueva lógica de acción institucional que fomenta formas de auto-organización; la identidad se constituye en incentivo para la acción reemplazando al viejo concepto de participación. Es dable destacar que esta independencia relativa con el Estado, lo es también en relación con la organización representativa de los pequeños y medianos productores, la Federación Agraria Argentina.

En estos movimientos no sólo encontramos una resignificación de la política sino también de los proyectos productivos. La conformación de cooperativas, ya no tienen el objetivo de lograr una mejor articulación con el sistema agroindustrial sino que se tratan de emprendimientos con el fin de impulsar el “comercio justo”, es decir, un intercambio social donde lo determinante es el valor del trabajo incorporado al producto y no su precio de mercado. También difieren en la relación con los recursos naturales. Se trata de proyectos productivos sustentables que buscan garantizar la soberanía alimentaria de las comunidades (en base a prácticas agrícolas, ganaderas y forestales que se desarrollan respetando un equilibrio ecológico y social).

En este sentido, la Cooperativa Río Paraná Limitada de Oberá, correspondiente al MAM, produce la yerba Titrayju (nombre que surge de la combinación de las primeras letras de las palabras tierra, trabajo y justicia). Se trata de una yerba orgánica (sin la utilización de agroquímicos) producida por pequeños productores adheridos a la organización y por la cual se les paga veinte centavos por encima del precio fijado por el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Se comercializa a través de métodos alternativos a los supermercados, como son las ferias francas de la provincia de Misiones, las delegaciones de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la central de Trabajadores Argentinos (CTA).

Al igual que el MAM, las cooperativas nucleadas al MOCASE sostienen el comercio justo como bandera de sus intercambios. Hacia el año 2002, la organización ha logrado construir una articulación con algunos Movimiento de Trabajadores Desempleados pertenecientes a la Coordinadora de Trabajadores Desocupados (CTD) Aníbal Verón bajo el eje "Soberanía Alimentaria, Reforma Agraria, Trabajo, Dignidad y Cambio Social". Uno de los resultados de esta articulación son los intercambios de productos, servicios y saberes entre ambas organizaciones que contradicen a la "lógica del mercado".

Otra experiencia interesante y que surge luego del 19 y 20 de diciembre de 2001 es la articulación entre organizaciones del campo y las asambleas barriales. Un ejemplo es la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo "La Asamblearia" que se propone distribuir y comercializar productos y servicios autogestionados en base a los principios arriba descriptos.

Reflexiones finales

Estos emprendimientos pueden ser consideradas como "campos de experimentación" (Boaventura de Santos; 2000). Se trata de producir para vivir, en base a valores y prácticas que contradicen la lógica de un sistema económico y social altamente excluyente. En este contexto, estas experiencias abren un debate que supone preguntarnos cómo y en qué medida las prácticas sociales que despliegan estas organizaciones logran excavar las profundas estructuras de dominación de la sociedad capitalista, posibilitando la institución de espacios más igualitarios, tanto en lo económico como en lo político. Al mismo tiempo, nos interrogan acerca del papel y de la importancia de estos emprendimientos en la subversión de un orden que se percibe como excluyente e injusto.

Bibliografía

Azpiazu D., Basualdo, E. M., Khavisse M. (1989) *El nuevo poder económico*; Buenos Aires: Legasa.

Basualdo, Eduardo (2002) *Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina*, Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.

De Sousa Santos, Boaventura. (2000) *A crítica da razão indolente. Contra o desperdício da experiência*, Brasil: Cortez Editora.

Giarracca, Norma (comp.) (2001) *La protesta social en la Argentina. Transformaciones económicas y crisis en el interior del país*. Buenos Aires: Alianza.

Teubal, Miguel. (1994) "Cambios en el modelo socioeconómico: problemas de incluidos y excluidos". En Giarracca, N. (comp.) *Acciones colectivas y organización cooperativa: Reflexiones y estudios de caso*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).

Teubal, Miguel y Rodríguez, Javier. (2002) *Agro y alimentos en la globalización. Una perspectiva crítica*. Buenos Aires: La Colmena.

Teubal, Miguel y Rodríguez, Javier (2001) "Neoliberalismo y crisis agraria". En Giarracca, Norma y colab.. *La protesta social en Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país*. Buenos Aires: Alianza.
